

C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En causa RUC N° 2000329137-6, RIT N° 107-2023, comparece don Cristian Sepúlveda Herrera, defensor, por el condenado Matías Herrera Vásquez, y recurre de nulidad en contra de la sentencia de veinte de septiembre del presente año, dictada por el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrado por los magistrados, don Bernardo Ramos Pavlov, Presidente de Sala, don Pierre de Baeremaecker Quiroz y don Fernando Valenzuela González.

El sentenciado mencionado fue condenado, sin costas, como autor del delito de robo con homicidio, en grado de frustrado y que conforme a lo dispuesto por el artículo 450 del Código Penal, se sanciona como consumado, previsto y sancionado en el artículo 433 N° 1, del mismo cuerpo legal, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día veintisiete de marzo de dos mil veinte, en perjuicio de Julio Alberto Mellado Gutiérrez, a sufrir la pena de QUINCE AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares, mientras dure la condena.

No se concede al sentenciado pena sustitutiva alguna de la Ley N° 18.216, por no reunir los requisitos para ello, en consecuencia, deberá cumplir la pena corporal impuesta, real, íntegra y efectivamente, debiendo abonársele el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa, correspondiente a mil setenta y seis días, conforme a la certificación emitida al efecto, por la Jefa de la Unidad de Causas del tribunal.

El medio de impugnación se funda como causal principal de nulidad en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, “Cuando, en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías aseguradas por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes...”. Lo anterior por existir distintas infracciones de garantías aseguradas por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes derivadas de una interpretación atentatoria y contraria al principio in dubio pro reo, vulnerando garantías fundamentales del debido proceso.

Tal hipótesis, fue reconducida por la Excm. Corte Suprema, quien estableció que de una atenta lectura del libelo, que lo que se reprocha por la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, al fallo de primera instancia, podría tener como sustento real un reclamo a la valoración de los antecedentes y a la



fundamentación de la sentencia, lo que es propio del motivo de invalidación del artículo 374 letra e) del cuerpo legal antes citado, lo que es materia de conocimiento de la Corte de Apelaciones respectiva.

Como causal subsidiaria, se invoca la prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, “Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”, en relación con el artículo 342 letra c), “La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”. Lo anterior por las omisiones efectuadas por el tribunal en relación a la valoración exigida en el artículo 297 del Código Procesal Penal, por cuanto se infringe el principio de razón suficiente.

Con fecha 14 de noviembre último, se celebró la audiencia de rigor, fijándose en definitiva la audiencia de lectura de la sentencia para hoy.

CONSIDERANDO:

Primero: Que como fundamento de la causal principal invocada, se señala que la defensa sostuvo como tesis la falta de participación, existencia de vulneraciones a garantías aseguradas por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y que aquello llevaba necesariamente a valorar negativamente la prueba dada la infracción a garantías fundamentales que tornaban los estándares de prueba y el debido proceso en prueba sin convicción tal como lo refiere el profesor español Jordi Ferrer Beltrán.

Expresa que las normas de tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, constitucionales y legales que esa defensa entiende infringidas son las siguientes: Artículo 8.2 letra c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Art. 19 N°3, inc. 5° de la Constitución Política de la República. Artículo 19. “La Constitución asegura a todas las personas”: N°3°. “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.” INC 5°. “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.”

Denuncia que la defensa hizo presente en distintas instancias procesales la vulneración de garantías fundamentales particularmente el derecho a defensa



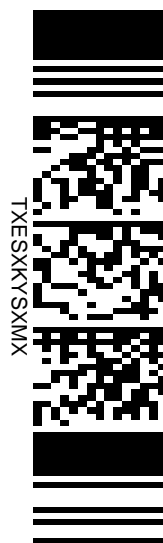
establecido en el artículo 19 N°3 y el debido proceso por la infracción de normativas procesales mínimas que tienen como único objeto garantizar la debida protección de los derechos del representado. La alegación deducida por la defensa dice relación con llevar al extremo la denominada teoría de las desviaciones previsibles, siendo lo único previsible por parte de su representado que el hecho en el que se vio involucrado dejó de ser un ir a retirar o buscar algo a ir a robar algo, cuestión que nace en el momento en que se habla de la necesidad de utilizar una herramienta llamada comúnmente como napoleón para el plan delictivo original.

Asevera que el tribunal sustenta su convicción de condena justamente en la valoración, rechazando los argumentos de la defensa en cuanto a sostener la falta de participación del acusado respecto al delito de robo con homicidio, vulnerando el debido proceso, toda vez que el tribunal olvida que el objetivo institucional de la prueba en el proceso judicial no puede ser otro que la averiguación de la verdad, entendida como correspondencia entre aquello que afirman los enunciados fácticos y lo sucedido aquel fatídico 27 de marzo de 2020. Indica que constituye un derecho asegurado por la Constitución Política de la República el que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y el artículo 19 N° 3° inciso sexto de la Carta Fundamental confiere al legislador la misión de definir siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. En torno a los tópicos que contempla el derecho al debido proceso no hay discrepancias en aceptar que lo constituye, a lo menos, un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que se dicten sentencias motivadas, etcétera.

Solicita declarar la nulidad de juicio oral y de la sentencia en el mismo pronunciada, y a fin de evitar que se incurra nuevamente en los vicios indicados precedentemente, disponga el tribunal la realización de un nuevo juicio oral respecto de su representado, por el tribunal no inhabilitado que corresponda.

Segundo: Que como causal subsidiaria, se invoca la prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por cuanto en el pronunciamiento de la sentencia se ha vulnerado el principio de la lógica de razón suficiente.

Expone que en sede penal nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto un sistema de libre valoración de la prueba, teniendo como límite los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente



afianzados, tal como lo dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal. Sobre el particular, la defensa estima que se ha vulnerado el principio de la razón suficiente, en la fundamentación misma de los hechos que se dieron por probados, unido a deficiencias argumentativas de los acusadores.

Alega que, en primer lugar, respecto a la declaración de su representado, él está siempre conteste no solo en los tiempos sino que además en lo referido por la prueba de cargo. La sentencia vulnera el principio de razón suficiente, puesto que ni siquiera se refiere y no se hace cargo de la tesis defensiva.

A juicio de la defensa, se da por probado un hecho que exige dolo directo, conocimiento pleno por parte de los partícipes y consentimiento. Respecto a este punto la Excm. Corte Suprema se ha pronunciado en Rol N°2491- 2019 de 12 de marzo de 2019, considerando décimo tercero, en los siguientes términos: “Que, en ese orden de consideraciones, el principio de razón suficiente, pese a que el adjetivo que integra su nomen iuris pareciera dar a entender que, al dirimir si ese principio fue transgredido o no, debe enjuiciarse si las razones que entrega la sentencia para establecer un hecho son bastantes o exiguas, de peso o livianas, mejores o peores, como para formar la convicción de su ocurrencia, lo cierto es que, tratándose de un principio de la lógica formal, atendida además la libertad de prueba y de valoración que como regla general imperan en este procedimiento, a lo único que debe atenderse al llevar a cabo ese ejercicio es si la prueba que según el fallo permite sentar un hecho como cierto, primero, existe en el proceso, segundo, si tiene el contenido que el fallo le atribuye y, tercero, si atendido ese contenido es posible llegar mediante una inferencia al hecho que el tribunal tiene por demostrado en base a esa prueba, sea ésta aisladamente considerada o en conjunto a otra u otras, todo ello con el propósito de evitar que la sentencia incurra en un salto argumentativo contrario a la lógica.”

Agrega que la sentencia incurre en una clara infracción al principio de razón suficiente, entendido como aquel principio de la lógica que postula que algo se explica en razón de sí mismo o en razón de otro, estableciendo una relación entre el efecto y la causa; lo que no concurre en este caso dado los escasos elementos probatorios contradictorios con los que ha resuelto y las razones -fuera de lógica- que el mismo Quinto Tribunal Oral en lo Penal ha brindado.

En opinión de la defensa, las infracciones antes señaladas fueron sustanciales, debido a que el tribunal sustenta su convicción de condena en base a la teoría de la convergencia de voluntades o la teoría de las desviaciones previsibles al extremo de desentenderse que su representado jamás tuvo el dominio del hecho. Lo anterior, fundándose todo en razones que se apartan de la



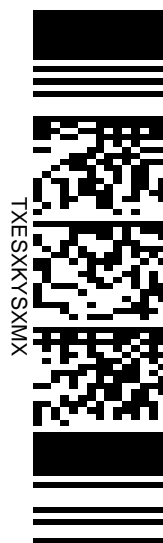
lógica y las máximas de la experiencia, en base a dichos puntos difusos, infringiendo el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente señala que las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su existencia. Este principio requiere la demostración de que un enunciado solo puede ser así y no de otro modo. Si la ley exige certeza sobre los extremos fácticos de los que se hacen desprender las consecuencias jurídicas emanadas de la sentencia, se requiere que la prueba en que se basa la decisión solo pueda dar fundamento a esas conclusiones y no a otras.

Asevera que de no haberse cometido en el fallo recurrido los errores en la valoración de la prueba denunciados acorde a los requisitos establecidos en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, el Quinto Tribunal Oral en lo Penal necesariamente debiese haber absuelto a su representado por no haberse alcanzado el estándar de convicción necesario ni haber podido acreditar más allá de toda duda razonable la participación de éste último en el ilícito de robo con homicidio establecido en el artículo 433 número 1 del Código Penal acorde a las exigencias propias del artículo 297 del Código Procesal Penal que establece que los Tribunales al apreciar la prueba no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, y que además la fundamentación empleada deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia, con lo cual se incumple el mandato que el legislador impone a los jueces al momento de dictar sentencia.

Requiere acoger la causal subsidiaria formulada, procediendo a declarar la nulidad del juicio oral y de la sentencia del mismo pronunciada, y a fin de evitar que se incurra nuevamente en los vicios indicados, disponga la realización de un nuevo juicio oral respecto a su defendido Matías Herrera Vásquez, por el tribunal no inhabilitado que corresponda.

Tercero: Que, el recurso de nulidad es un medio de impugnación de carácter extraordinario y de derecho estricto lo que obliga a quien recurre, a ajustarse estrictamente a la normativa que lo regula y su procedencia es limitada, debiendo respetarse en su interposición las causales que la ley contempla y las formalidades, en orden a precisarlas con claridad así como los vicios o infracciones en que se fundan (SCS, Rol N° 26.890-19, de 27 de febrero de 2020).

Cuarto: Que respecto de la primera causal de invalidación formalizada por el recurrente, en ella se alega infracción de garantías en cuanto al proceso previo y legalmente tramitado, presunción de inocencia y juicio racional y justo. No obstante, en ningún momento se desarrolla como del desarrollo del juicio, investigación,



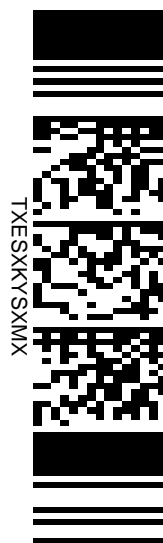
audiencias previas y juicio se ha producido la infracción alegada. Solo se indica que no se está de acuerdo con la teoría de desviaciones previsibles que sigue el tribunal al momento de valorar la prueba y así dar por acreditado que el condenado participa en los hechos conforme el artículo 15 N° 3 del Código Penal.

Lo anterior, se evidencia como un problema de valoración, por lo que la Excma. Corte Suprema remitió los antecedentes a esta Corte para su conocimiento y fallo por cuanto se estimaría que existe un cuestionamiento a la valoración de la prueba conforme la causal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta claro que se debe desestimar esta causal puesto que no existe desarrollo alguno de la misma, limitándose la defensa a reproducir desde la sentencia la prueba que fue incorporada al juicio, para luego de esto, en forma inmediata, concluir que existe infracción de las garantías señaladas.

Se evidencia en el recurso un desacuerdo con la sentencia porque no se le cree a la versión del acusado, lo que no constituye vicio alguno. Se cuestiona que en la sentencia se acredita participación “extremando la teoría de las desviaciones previsibles”, o sea, que no era posible concluir la participación del acusado en los hechos, puesto que no se le comunicaría la conducta de los demás sujetos a dicho acusado al mantenerse este en el vehículo mientras sucedían los disparos al interior del vehículo. Sin embargo dicha participación se justifica por el tribunal al desarrollar el fallo, en el basamento octavo, que dicha participación se acredita, entre otros elementos, considerando que existe un testigo de los hechos que a las afueras del domicilio de la víctima entrega la patente del vehículo del acusado, que se levantaron cámaras que posicionan ese vehículo en las inmediaciones, que había tráfico de llamadas que también lo posicionan en dicho lugar; que la aplicación Uber mantiene ese vehículo registrado a nombre del acusado, que existen escuchas telefónicas de la pareja del acusado donde se da cuenta que este se entregará por estos hechos cuando quien apretó el gatillo se entregue, y eso entre otras probanzas unido a la declaración del acusado, probanzas que son suficientes para acreditar la participación del encartado.

Al efecto, tal considerando señala: *“En el contexto referido, las acciones ejecutadas por Herrera incrementaron sustancialmente el riesgo de lesión o puesta en peligro del bien jurídico y su contribución que también abarca la fase ejecutiva, es tenida como condicionante de la actuación de los autores, presentando aportes indispensables para facilitar la realización del hecho estando previamente concertados, lo que permite establecer su calidad de autor en los términos del artículo 15 N°3 del Código Penal.”*



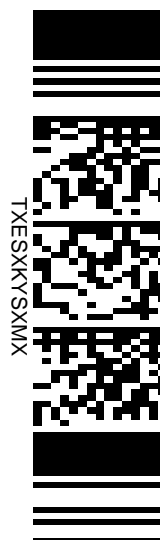
En consecuencia, se explica por lo tanto, razonablemente, por qué la participación del acusado no procede conforme el artículo 15 N°1 del Código Penal, pero sí procede conforme lo mandata el artículo 15 N°3 del mismo cuerpo legal, una especie de complicidad elevada a autoría. Tal explicación razonable se encuentra correctamente razonada en los considerandos séptimo y octavo de la sentencia.

Quinto: Que, por otra parte, analizada la sentencia objeto de regaño, en lo que al recurrente se refiere, aparece en sus fundamentos cuarto y quinto la valoración de la prueba y los hechos acreditados, en los siguientes términos:

“El día 27 de marzo del año 2020, en horas de la tarde, Matías Francisco Ignacio Herrera Vásquez, junto a otro individuo actualmente fallecido de nombre Cristian Ahumada Castañeda y a otros sujetos no identificados, concurrieron en un automóvil marca Chevrolet, color blanco, placa patente KWRT.65, manejado por Herrera Vásquez, hasta el domicilio de calle Valenzuela Puelma Número 4799, comuna de Maipú, lugar en el que cortaron la cadena que cerraba la reja de ingreso a ese inmueble, para luego acceder al mismo Ahumada Castañeda, exigiendo la entrega de especies a los moradores del domicilio. Ante ello el dueño de casa, Julio Alberto Mellado Gutiérrez, de 73 años de edad, opuso resistencia al asalto disparando un arma de fuego. Por su parte Ahumada Castañeda disparó el arma que portaba, impactando a Julio Mellado Gutiérrez en el tórax, causándole la muerte, luego de lo cual los sujetos huyeron en el vehículo ya referido, conducido por Matías Francisco Ignacio Herrera Vásquez, sin haber obtenido la entrega de las especies exigidas. Cristian Ahumada Castañeda falleció posteriormente por causas ajenas a estos hechos”.

A su turno, el basamento séptimo analiza la calificación jurídica de los hechos acreditados, y en lo que atañe al recurso que nos convoca, lo encuadra dentro de la figura típica de robo con homicidio, prevista y sancionada en el artículo 433 N° 1, del Código Penal, en grado de frustrado, dado que concurren en la especie, los requisitos que exige el tipo penal para ser sancionado, esto es, a) La existencia de una acción dirigida a la apropiación de especies muebles ajenas, con ánimo de lucro, b) sin la voluntad de su dueño, c) que para lograr la finalidad perseguida con dicha acción se haya dado muerte a una persona.

Por su parte, en relación a la participación del acusado, ésta se determina sobre la base de las motivaciones esgrimidas en el considerando octavo, esto es, acorde a la evidencia allí analizada, unido a lo señalado por el propio acusado, a través de su declaración presentada tanto en estrados, como durante la



investigación, ante el Ministerio Público, en virtud de las cuales reconoció tanto los hechos que se han tenido por establecidos, como su participación en los mismos.

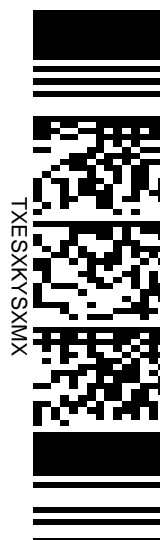
La sentencia califica la participación del acusado, Matías Francisco Ignacio Herrera Vásquez, en el ilícito de autos, como autoría, toda vez que previamente concertado para su ejecución, con los demás imputados, facilita medios para su comisión, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N° 3, del Código Penal. Al efecto señala: “Se puede observar que respecto a este acápite, concurren las exigencias doctrinarias, del dominio del hecho, que requiere un acuerdo o plan común, una contribución esencial y la prestación de medios en la fase ejecutiva.

El acuerdo o plan común que requiere una convergencia de dolo, en el caso de Herrera Vásquez, es posible concluir que existía dicho acuerdo, dado que en su vehículo movilizó a los autores ejecutores, como también facilitó el uso de una herramienta para vencer los mecanismos de seguridad del inmueble afectado, lo que supone que previamente estuvo de acuerdo en la realización de una conducta ilícita determinada previo a la ejecución y, por lo demás el acusado reconoce haber acordado sustraer unas plantas del inmueble afectado, sabiendo que los ejecutores portaban armas de fuego, lo que supone un acuerdo de sustracción con utilización de mecanismos violentos para asegurar el resultado del ilícito acordado.

En cuanto a la esencialidad de la contribución, se estima que la contribución de Herrera resultó determinante, dado que facilita el transporte al lugar, proporcionando igualmente la huida y al menos entrega una herramienta para vencer los mecanismos de seguridad del escenario de los hechos.

Sin embargo, no puede estimarse que dichas conductas sean de carácter ejecutivo en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, como refiere la Fiscalía, dado que no controla ni participa en la ejecución de la conducta descrita en la norma, contribuye a su realización pero no despliega ninguna conducta prevista en el tipo penal y, como acciones necesarias, su actuación se despliega a una de las formas de autoría contemplada en el artículo 15 N°3 del Código Penal, en cuanto la norma exige que concertados para su ejecución faciliten medios para su comisión.

En el contexto referido, las acciones ejecutadas por Herrera incrementaron sustancialmente el riesgo de lesión o puesta en peligro del bien jurídico y su contribución que también abarca la fase ejecutiva, es tomada como condicionante de la actuación de los autores, presentando aportes indispensables para facilitar la realización del hecho estando previamente concertados, lo que permite establecer su calidad de autor en los términos del artículo 15 N°3 del Código Penal.



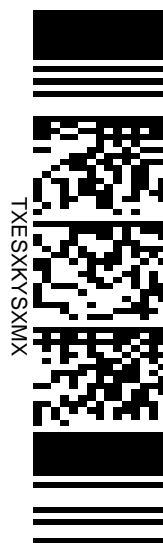
Conforme a lo señalado en este considerando, como en el que antecede, el tribunal rechaza las alegaciones de la defensa respecto de la falta de participación de su representado, por cuanto la figura acreditada se trató de un robo con homicidio y no de un homicidio simple, como sostiene la defensa, dado que conforme a la dinámica de los hechos es posible inferir la intención de apropiación de especies mediante mecanismos violentos, aceptándose los resultados del mismo, a lo menos eventualmente”.

No se evidencia por lo tanto, ninguna infracción a las máximas de la experiencia ni a las reglas de la lógica por lo que la causal debe ser rechazada.

Sexto: Que, del mismo modo, cabe recordar el deber del Ministerio Público, en cuanto pesa sobre aquél la carga de la prueba, debiendo conseguir de parte del tribunal la convicción condenatoria, lo que en la especie, en virtud de lo razonado por los juzgadores de la instancia se logró por los fundamentos indicados en su fallo, dando estricto cumplimiento a lo mandatado en el artículo 295 del Código Procesal Penal que consagra en este procedimiento la denominada “libertad de prueba”, expresando que: “...*Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley...*”.

Séptimo: Que, además la apreciación de la prueba y las conclusiones obtenidas de ella, se encuentran dentro del ámbito de la convicción propia y exclusiva del tribunal de mérito, adquirida a través del principio de inmediación -luego de debate público y contradictorio-, en virtud del cual los sentenciadores sólo pueden fallar de acuerdo con las impresiones personales que obtengan del acusado y de los medios de prueba, resultando impropios para los efectos de este arbitrio los diversos cuestionamientos hechos por el recurrente a la decisión de los juzgadores, pretendiendo revertir con sus argumentos la persuasión alcanzada mediante ellas y sustituirla por la que pudiera lograr esta Corte, no pudiendo olvidarse que el establecimiento de los presupuestos fácticos resultan inmutables y no son susceptibles de revisión por este medio de impugnación procesal.

Octavo: Que, a su turno, sobre la segunda causal de nulidad alegada, es aquella que contempla el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, por cuanto en el pronunciamiento de la sentencia se ha efectuado una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, hipótesis que adolece de un problema de forma, puesto que se la sustenta en concordancia con el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, siendo esta última una causal independiente que constituye un motivo absoluto de nulidad que debió impetrarse en forma autónoma e independiente del artículo 373 letra b),



defecto procesal que por sí sólo es suficiente para desechar el apartado de nulidad esgrimido.

Noveno: Que, sin embargo, se procederá a analizar la causal.

Se alega que se infringen las reglas de la lógica, específicamente la de la razón suficiente. No obstante, no se señala en parte alguna del recurso la premisa errónea, el error en el silogismo, el perjuicio en la máxima de la experiencia o el error en la conclusión obtenida en base a las premisas del fallo.

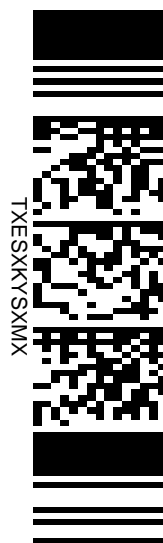
La defensa se limita a definir en qué consiste la razón suficiente, señalar fallos que la definen, pero no señala de qué forma se ha producido la infracción. En algún momento se señala que el fallo no se hace cargo de la teoría del caso de la defensa, sin embargo esto no es efectivo, puesto que si lo hace en los considerando séptimo y octavo al hablar de la participación del acusado y al referirse al tipo penal configurado, desechando la falta de participación y la existencia de un delito de homicidio simple y un delito de robo con intimidación, tal como se alegaba. Desestimación razonada que se hace sin infringir las reglas de la lógica.

En efecto, como ya se expuso, se acredita la participación del acusado considerando que los sujetos se desplazan en el vehículo del acusado, que este proporciona herramientas para la comisión del injusto (napoleón), que se escuchan disparos desde el exterior y que a pesar de aquello se mantiene en el lugar y le proporciona a los sujetos un vehículo de huida.

Además se indica en el fallo que existe concierto para cometer un delito de robo en el que los partícipes conocen todos que se cometerá con armas de fuego, siendo una máxima de la experiencia que puede existir oposición en estos casos y que las armas son elementos aptos para producir la muerte, de manera que las catastróficas consecuencias del hecho están cubiertas por el dolo de los sujetos concertados para la comisión.

Tampoco se infringe lo señalado en el artículo 340 del Código Procesal Penal, puesto que no es solo en base a la declaración del acusado que se llega a la decisión condenatoria, sino que son otras probanzas las que permiten llegar a esa conclusión, unidas a la declaración del acusado, a quien incluso se le reconoce la circunstancia atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal, por lo mismo.

Finalmente, y nuevamente en el caso de esta causal, no existe premisa errónea, error en el silogismo, perjuicio o error en las conclusiones obtenidas en el fallo, y tampoco se alega de qué forma podría haberse infringido la razón suficiente, por lo que la causal debe ser desestimada, y así también el recurso intentado.



Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 297, 372, 373, letra b), 374, letra c), 375, 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA, sin costas**, el recurso de nulidad deducido por el abogado señor Cristian Sepúlveda Herrera, defensor, por el condenado Matías Herrera Vásquez, contra la sentencia de veinte de septiembre del presente año, dictada por el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, declarándose, por consiguiente, que ella **no es nula**.

Regístrese y comuníquese, sin perjuicio de su notificación por el estado diario.

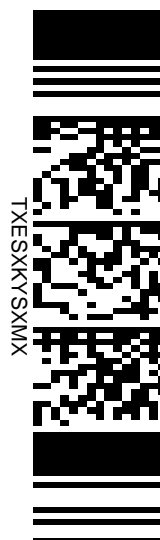
Redacción del ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez.

RUC N° 2000329137-6.

RIT N° 107-2023.

N°Penal-5387-2023.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez e integrada por la Ministra (S) señora Soledad Jorquera Binner y por la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.



Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Antonio Ulloa M., Ministra Suplente Maria Soledad Jorquera B. y Abogada Integrante Bárbara Vidaurre M. Santiago, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

